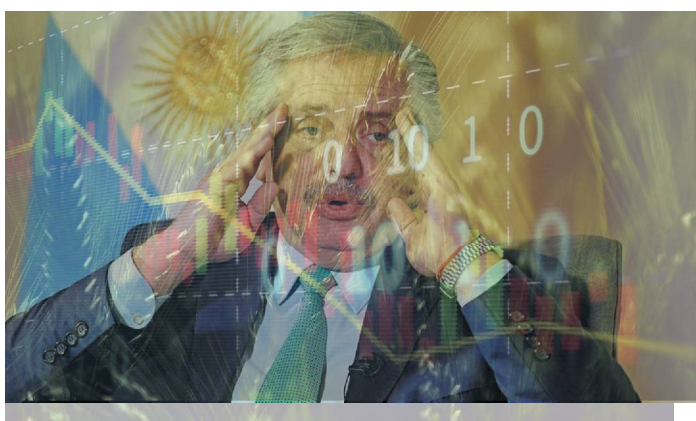


órgano del PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO de Argentina
Sección del Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional

EL GOBIERNO ES INCAPAZ DE FRENAR EL AUMENTO DE PRECIOS



**CRECE EL
HAMBRE Y LA
DESOCUPACIÓN**

**CON LA
COMPLICIDAD DE
LA BUROCRACIA**



**PREPARAR DESDE LAS BASES LA LUCHA
POR EL REPARTO DE HORAS DE TRABAJO
Y POR UN SALARIO MÍNIMO QUE CUBRA
EL COSTO DE LA CANASTA FAMILIAR**

REVOLUCIÓN Y DICTADURA PROLETARIAS



2020: Un año de ataques contra la clase obrera y el resto de los oprimidos

El 2021 inicia con una perspectiva muy dura para todos los trabajadores. Según los últimos datos del INDEC, la Canasta Básica Total, **que no contabiliza el costo del alquiler**, se encuentra en \$ 54.208. La inflación anual presentó un aumento general del 39,1%. Sin embargo, rubros como alimentos y bebidas aumentaron un 42,1%, y la vestimenta aumentó un 60%.

El Salario Mínimo Vital y Móvil decretado por el Gobierno Nacional hoy se encuentra en \$ 20.587,50, es decir, **un insulto que ni siquiera llega a ser la mitad de lo que cuesta la Canasta Básica Total presentada por el mismo gobierno**. Es importante comprender que el SMVyM no es más que el límite que impone el gobierno para marcarle a las patronales que por debajo de eso se encuentra la “indigencia”, pero no las obliga a que paguen lo que cuesta vivir. ¿Y eso por qué? Porque el Estado burgués no es más que el administrador de los intereses generales de la burguesía.

La mayoría de los salarios durante el 2020 han perdido poder adquisitivo frente a la inflación. El único caso que rompió los parámetros fue la paritaria de los Aceiteros, que cerró por \$93.647 para el trabajador de la categoría más baja. Este número sí presenta el costo real de la Canasta Familiar, y por eso no dejamos de señalar que es una victoria para toda la clase obrera y el ejemplo a seguir. Los patronales se hacen rogar para aumentar los salarios alegando que generan pérdidas a las empresas y las hace inviables, pero los trabajadores somos ajenos a los libros contables de las empresas, y no sabemos cuánto ganan en realidad. La apertura de los libros contables es una tarea que no puede estar desligada del reclamo salarial.

Desocupación, un peligro para los salarios

El año pasado terminó con millones de desocupados lo que significa una pérdida de decenas de miles de millones de horas de trabajo productivo. Otro dato a tener en cuenta también, es el número de trabajadores no-asalariados es decir, que no perciben un salario fijo y que se encuentran fuera de la negociación colectiva. Este es un verdadero problema para el conjunto de la clase obrera y el resto de los trabajadores. La desocupación no sólo desemboca en

flagelos sociales tales como la delincuencia y el narcotráfico, elementos que afectan a la vida de los trabajadores, sino que también es utilizada por los patronales para empujar los salarios a la baja o para amenazar con despidos bajo el viejo argumento: “detrás tuyo hay una fila de miles que se mueren por un trabajo”. La burguesía como clase históricamente en decadencia ya ni siquiera es capaz de emplear a toda esa fuerza de trabajo disponible. Para terminar con la desocupación, es necesario el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario.

Desde el Partido Obrero Revolucionario señalamos que el camino a seguir es la acción directa de masas tal y como lo demostraron los Aceiteros, el Movimiento de Mujeres y otros sectores. La clase obrera es la única clase que puede hacer avanzar la rueda de la historia, acaudillando al resto de los oprimidos, erigiendo su propio Estado, la Dictadura del Proletariado, expropiando los medios de producción en manos de la burguesía.



**HASTA LA VICTORIA
DEL PROLETARIADO SIEMPRE
COMPAÑERO JUAN YÁÑEZ
PRESENTE !!!**
APOR
PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO

www.por-cerci.org

☎ 11 2351 4699

 **Partido Obrero Revolucionario - Masas - Argentina**

Gobierno incapaz e impotente para contener la escalada de precios

Burocracia traidora privilegia los intereses patronales

Todas las semanas, todos los meses, se escucha el lamento del gobierno sobre cómo crecen los precios de los productos alimenticios esenciales y explican que los empresarios se están abusando diciendo que el dólar se ajusta por debajo de la inflación, que las tasas de interés se han reducido fuertemente, que las tarifas están congeladas, que los salarios están deprimidos, etc. etc. Mil explicaciones pero ninguna medida para enfrentar el crecimiento de los precios.

Los salarios y las jubilaciones han vuelto a perder poder adquisitivo en 2020. Y la tendencia sigue. Estiman que la inflación en el rubro alimentación de las últimas 4 semanas es del 4,4%. Las patronales buscan por todos los medios incrementar sus ganancias, no les importa las consecuencias que tiene, no hay ninguna preocupación “moral” de su parte. Esta actitud natural de los capitalistas no se combate con discursos y apelaciones morales.

La realidad es que hoy somos más los pobres que hace un año, y los pobres somos cada vez más pobres. Solo el 8% de los salarios formales cubre el costo de la canasta familiar. Podríamos afirmar que los salarios informales en su totalidad están por debajo del costo de la canasta familiar. Un dato de la brutalidad del retroceso en las condiciones de vida es la caída del consumo de carne ¡al nivel más bajo en 100 años!

¿Por qué suben los alquileres por encima de la inflación? Porque no se construyen 400.000/500.000 viviendas por año para terminar con el déficit habitacional. La presión del negocio inmobiliario junto con las restricciones presupuestarias que imponen los acreedores externos, a los que se someten los gobiernos, hace que esta demanda no se resuelva y se agrave año tras año. La construcción de viviendas populares ni siquiera compensa el crecimiento vegetativo de cada año. El costo de la vivienda se lleva una parte muy elevada de nuestros ingresos.

¿Por qué suben los precios de los alimentos? Si los argumentos del gobierno son ciertos, si los costos que pagan los empresarios los pagan en pesos, si todos los componentes se producen en el país, etc. Porque la producción y distribución está concentrada en muy pocas manos, monopolizada. Y también guiada por el precio dólar que tienen los productos en el mercado internacional. La llamada “ley de góndolas” o la política de “precios máximos” o “precios cuidados” no afectan ese poder.

El gobierno está atado de pies en manos porque ha jurado defender la gran propiedad privada. No hay forma de

privilegiar la producción para el mercado interno, garantizar precios accesibles para la mayoría de la población, que todos los productos lleguen a los supermercados o mercados locales, mientras un puñado de distribuidoras concentra las principales marcas y variedad de productos y una pocas cadenas de supermercados enganchadas con los bancos los ponen a la venta al público.

No hay forma de defender la “mesa de los argentinos” o conquistar “la soberanía alimentaria” y al mismo tiempo garantizar que la tierra siga en manos de unos pocos terratenientes, que el agronegocio y la exportación de todos los productos siga en las mismas manos que controlan los puertos y manejen el ingreso de divisas al país. Son intereses contrarios, que no se pueden conciliar, o se defiende el interés de la mayoría oprimida cada vez más pobre o se defiende el interés de la oligarquía, los bancos y las multinacionales.

¿Y, dónde está la famosa CGT? Su dirección actúa por cuenta y orden de esa oligarquía, de los bancos, de las multinacionales. Estos traidores deben ser expulsados del movimiento obrero. Para que sea posible los trabajadores deben independizarse políticamente, romper con los partidos capitalistas, que defienden la explotación del trabajo y la gran propiedad, romper con el gobierno y defender sus propios intereses de clase.

Este es el trabajo más importante. Ayudar a la vanguardia más consciente a que rompa con las ilusiones en la democracia burguesa, a que rompa con el pacifismo y la colaboración de clases, para que ayude a amplias capas de los trabajadores a romper con el régimen burgués, sus partidos y sus instituciones.

Llamamos a toda esa militancia combativa que está asqueada de las maniobras, los sapos que se tragan, de las componendas electorales, a tomar en sus manos la tarea de poner el partido revolucionario, que hoy está encarnada en el POR. A tomar en sus manos la política de la clase obrera, la única consecuentemente antiimperialista, que llevará la lucha por la soberanía nacional hasta el final.

La clase obrera es la única alternativa con el poder para vencer a la burguesía y transformar la sociedad, para poner todos los recursos a nuestro servicio, bajo nuestro control, para planificar la economía, derribando al Estado burgués.

Debemos ayudar a las masas a romper con la burguesía, con su gobierno, en el que todavía tienen ilusiones. Este trabajo es irremplazable.

Al igual que sucedió con Vicentin, con la centralización de la salud, con el reconocimiento de la deuda externa

El gobierno retrocedió ante la oligarquía terrateniente y los pulpos exportadores en la cuestión del maíz

Ante la posible falta de maíz para abastecer el mercado interno hasta marzo, en que comienza la nueva cosecha, el gobierno había limitado los permisos de exportación. Los sectores más poderosos del campo, acompañados por sus medios de comunicación lanzaron inmediatamente una campaña para obligar al gobierno a retroceder y tomaron medidas de paro y movilización.

El gobierno no estaba confiscando sus cosechas, ni obligándolos a vender en el mercado interno por debajo del precio que obtienen con la exportación. Simplemente establecía por dos meses la prioridad de abastecer el mercado interno.

El maíz es utilizado como materia prima en sus procesos de transformación para la producción de proteína animal como carne de cerdo, pollo, huevos, leche y feedlot (**engorde a corral**).

Hasta principios de enero se había autorizado la exportación de 34,23 millones de toneladas de maíz, sobre un total exportable de 38,50 millones de toneladas. Las 4,27 millones de toneladas restantes deberían quedar disponibles para el consumo interno. En esta última cosecha la producción alcanza los 50 millones de toneladas.

¿Por qué razón prefieren exportar el maíz sin procesar antes que vender al mercado interno, si el precio es el mismo? Porque hay menos controles y regulaciones en la exportación, pueden declarar menos cantidad y dejar las divisas en el exterior. No quieren declarar la producción y la venta real, para pagar menos impuestos, evadir.

Este conflicto tiene especial importancia porque muestra el peso que tienen el precio internacional y las devaluaciones, que se trasladan al precio de numerosos productos de consumo popular. La oligarquía tiene ganancias extraordinarias y no quiere ceder un centavo. Cuando vende internamente aplica el precio que cobraría si lo exportara. Los productores de maíz **augmentaron sus ganancias en dólares un 73,7%** respecto del año pasado.

Mientras se realizaban las reuniones entre gobierno y las patronales el precio del maíz se disparó. Subió 9,8 dólares, un 5,06%, y la tonelada se comercializó a 203,6 dólares en el mercado de Chicago (el precio más elevado desde 2013). La soja llegaba a 522,5 dólares la tonelada, el máximo precio desde mediados de 2014 (un 52% más que hace un año). Es importante marcar que el rendimiento de la producción de maíz es el triple por hectárea que la de la soja.

Este sector, uno de los más poderosos de la economía, sabe de las necesidades del gobierno de exportar todo para generar divisas para poder acumular reservas, para poder pagar la deuda externa y saca todo el provecho de esta situación.

Un funcionario explicó; “el sector agroindustrial y agroalimentario... permiten proyección a los mercados internacionales lo que redundará en **la obtención de las divisas necesarias para el desarrollo y la reconstrucción del tejido social y productivo de nuestro país**”. Pura mentira, las divisas son necesarias para pagar una deuda externa fraudulenta, que debía ser desconocida.

El gobierno queda acorralado por su política de conciliación con esos sectores, porque al mismo tiempo promete frenar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de la mayoría. A su vez, los acreedores externos le exigen que no aumente los subsidios y reduzca el déficit de presupuesto, cerrándole la puerta a compensar a la industria local esos mayores precios que tiene que pagar por el maíz. A cada paso el gobierno desnuda toda su impotencia.

Es tan grande la diferencia que provoca la suba de precios multiplicada por la devaluación del peso que una pequeña contribución de los exportadores para crear un fondo para subsidiar el precio interno es ridícula. **Quieren convencerlos que han encontrado una solución para no reconocer que han cedido vergonzosamente ante un puñado de oligarcas.**

Respetando la gran propiedad privada no hay forma de “desacoplar” los precios internacionales del mercado interno. La defensa de la “mesa de los argentinos” es un cuento miserable. El resultado es que este año el consumo de carne cayó al nivel más bajo en 100 años. La oligarquía no va a vender ni un gramo de cereal internamente por debajo de lo que obtiene exportando.

Los especuladores de la Sociedad Rural afirman mentirosamente que el maíz y la soja tienen escasa incidencia en los precios. Que en el pollo es de un 21%, en la leche un 8%, en el asado un 7%, y en el cerdo 10%.

El INTA de Marcos Juárez informa que el 65% del costo total del cerdo es la alimentación y esa alimentación se compone de 68 por ciento de maíz y 29 por ciento de soja.

El gobierno retrocede ante la presión y exigencia de los poderosos y ni siquiera informa a la sociedad sobre quién produce, qué cantidades, y cómo han crecido en forma extraordinaria sus ganancias en un período que la gran mayoría ha retrocedido en su poder adquisitivo y no puede satisfacer las más mínimas necesidades. Los “productores” maiceros están superconcentrados, no se trata de pequeños chacareros.

La ganancia en dólares para la zona núcleo (norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe y Entre Ríos), donde los rindes se acercan al promedio histórico de 95 quintales por hectárea, asciende a 853 dólares, derivado de costos totales por 484 dólares e ingresos netos de 1337 dólares.

Esto revela la importancia de expropiar la gran propiedad rural para poder decidir qué se produce, cómo se produce, dónde se vende, a qué precios, cuánto se expor-

ta y cuánto se importa, a quién. Vinculado a la necesaria nacionalización del comercio exterior, recuperando todos los puertos, los ríos, y las aduanas.

¡Terminar con las Obras Sociales y con toda la salud privada! Por un sistema único de salud estatal

A fines de diciembre Cristina Kirchner encendió las alarmas en la CGT al sostener que *“tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”*. Esta simple declaración pesó más para los burócratas sindicales que todos los despidos, suspensiones y rebajas salariales del 2020. Aterrados ante la posibilidad de algún plan del gobierno de implementar un control sobre sus negociados, el 11 de enero se reunió el Consejo Directivo Nacional de la CGT y emitió un documento de defensa de las Obras Sociales en el que afirman que *“el Coronavirus demostró la solidez y nivel de cobertura de uno de los sistemas de salud más solidarios del mundo, al tiempo que resultó evidente la necesidad de dotarlo de fondos suficientes para garantizar la salud de todos”*.

Unos días antes Alberto Fernández le había pedido una reunión en la Casa Rosada a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud del sector privado (UAS), para asegurarle que *“el Gobierno de ninguna manera está planteando una estatización del sistema de salud ni nada que se le parezca”* según palabras del propio Belocopitt. **Éste añadió que el presidente le transmitió “tranquilidad” y que también hablaron de los aumentos de las prepagas, nuevos “beneficios impositivos” y hasta del restablecimiento del ATP.**

El Gobierno ya no nos sorprende con estas volteretas, un día dan un discurso radical para contentar a quienes aún guardan ilusiones en su política y al día siguiente llaman a los verdaderos dueños del poder para darles tranquilidad y satisfacer sus demandas. Lo mismo ocurrió el año pasado con el comienzo de la pandemia cuando el plan de “centralizar” la salud duró menos de 24 horas, o con la estatización de Vicentin.

A lo largo del 2020 el Gobierno Nacional entregó \$7.000 millones a las Obras Sociales para “auxiliarlas” dado que sus ingresos se vieron reducidos por... los despidos y el retroceso salarial! Fondos gigantescos que van a parar a

la caja negra de los negociados entre la burocracia y la medicina privada donde nos dicen que por la pandemia se incrementaron sus costos pero sabemos que han aprovechado para reducir aún más las prestaciones y una buena parte de la atención se ha trasladado a los hospitales públicos.

El Gobierno se ha comprometido con el FMI a reducir el gasto fiscal para cumplir con el pago de deuda, por lo que no podemos descartar que se vea obligado a tomar alguna medida de mayor control sobre una parte de los fondos de las obras sociales, como ya ocurre actualmente con el Fondo Solidario de Redistribución donde una parte de los aportes queda primero en manos del gobierno y éste decide cuándo entregarlo a la burocracia (estamos hablando de miles de millones de pesos que todos los años aceitan los “pactos sociales” y la sumisión de la burocracia a los distintos gobiernos).

El sistema de Obras Sociales y Prepagas no tiene nada de “solidario” como le gusta decir a los burócratas, sino que se ha convertido en el principal agente de privatización y destrucción de la salud pública en los últimos 50 años, estableciendo un sistema de salud diferenciado de acuerdo a los ingresos que en los hechos significa que la mayoría de los trabajadores veamos postergados por años o negados tratamientos elementales, o tengamos que poner más plata de nuestros bolsillos para la atención de nuestra salud.

El peronismo es incapaz de defender la salud, tanto los gobiernos de los Kirchner como de Fernández tiene como punto de partida no tocar el sistema de las Obras Sociales que impuso la dictadura de Onganía, así como la provincialización de los hospitales públicos de la última dictadura y de Menem.

La salud no puede estar en manos privadas, tenemos que defenderla como un derecho con el programa de expropiación sin pago de todos los laboratorios, clínicas y sanatorios y su estatización integrándolos en un sistema único de salud estatal, nacional y gratuito.



El gobierno de Fernández entrega la soberanía nacional, lo esencial de las políticas neoliberales no se toca

El gobierno se niega a recuperar el manejo estatal de la ruta navegable Hidrovía Paraná, por donde circula el 75% del comercio exterior del país. Resolvió que seguirá en manos privadas, tal como reclamaban los exportadores. **Es una medida antinacional para favorecer que siga el saqueo de nuestros recursos.**

En agosto Fernández anunció la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, en la que participarían Nación y las siete provincias costeras del Paraná, y de un Consejo Federal Consultivo para atender las políticas de transporte a través de la vía navegable integrada por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, ante el próximo vencimiento del contrato de la actual concesionaria -Hidrovía S.A., integrada por la compañía belga Jan de Nul y la argentina EMEPA. Concesión otorgada por Carlos Menem en 1995, por un plazo inicial de 10 años, prorrogada en varias oportunidades. **La recuperación del control, el manejo y la explotación de este recurso es vital para el desarrollo nacional y regional.**

A fines de noviembre da marcha atrás con su anuncio: se publicó el decreto 949/20 que “habilita al ministerio de Transporte a seleccionar mediante licitación pública internacional al mejor operador de la hidrovía que mediante el cobro de la tarifa de peaje deberá afrontar las obras e inversiones sin ninguna clase de subsidios del Estado”, para controlar la traza que va desde el punto de confluencia entre los ríos Paraná y Paraguay, en la provincia del Chaco, en la frontera con Paraguay, hasta su desembocadura al Río de la Plata y el Océano Atlántico, por Buenos Aires.

¿Por qué se abandonó la creación de la Administradora Federal? ¿Quién toma las decisiones por encima del Presidente? ¿Cuál es el negociado? ¿Es una imposición de la Embajada, del FMI? La decisión de seguir con la concesión y el llamado a licitación para el dragado y balizamiento que permita la “modernización, ampliación, operación y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal” comprendida por el Río Paraná, el Río de La Plata y el Canal Punta Indio (ruta que une los puertos de Montevideo y Buenos Aires). La decisión se complementa con la demora en la construcción del Canal Magdalena, una vía de entrada directa al puerto de Buenos Aires para evitar la escala obligada actual en Montevideo. La obra fue incluida en el Presupuesto 2021.

Esta medida tiene importancia estratégica ya que por esa vía fluvial circulan anualmente 4600 embarcaciones transportando 125 millones de toneladas de la producción agropecuaria e industrial.

Se denuncia también que carece de sentido que la Argentina acondicione el acceso por el Río Paraná Bravo al puerto uruguayo de Nueva Palmira si por allí no sa-

len cargas argentinas, y se facilitan las condiciones para el contrabando y la evasión tributaria a través de ese puerto. Se trata de negocios incalculables de las agroexportadoras, corrupción así indetectable.

De esa forma los empresarios que se han radicado en Paraguay y Uruguay hacen la triangulación que les ha permitido eludir el pago de retenciones y evadir toda clase de impuestos. Maniobra ya denunciada en el fraude de Vicentin.

El subsecretario de Vías Navegables ha sido denunciado por sus vínculos con empresas multinacionales. Leonardo Esteban Cabrera Domínguez fue relacionado con el gigante multinacional de granos Dreyfus, y a Jan de Nul, actual concesionaria de la hidrovía, y contaría con el apoyo de la pastera UPM (ex Botnia).

Todos los canales y puertos fueron construidos, dragados, señalizados, estudiados y construidos por el Estado. La privatización fue una entrega de soberanía sostenida por todos los gobiernos.



Canal Magdalena

A partir de la década del '90, cuando se privatiza todo, los puertos pasaron a estar en manos de las cerealeras, son los grandes grupos los que manejan, y este era un pedido de las multinacionales para tener el control de todo el funcionamiento. Buscan que toda la producción salga a través del puerto de Montevideo, que les resulta más rentable.

Desde el sindicato de Dragado y Balizamiento, titular de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA) se declaraba que “Es sabido que el 90% del movimiento de contenedores y la comercialización de granos se da por el entramado portuario y las rutas fluvio-marítimas, por eso la participación de los gremios es vital a la hora de instrumentar un diseño capaz de mejorar la logística y que tengan como eje la recuperación de la navegación interior”.

Desde otro sector se agrega que “Por allí sale toda la producción del Cono Sur, no sólo de Argentina, también de Brasil, de Bolivia, de Paraguay. Por eso **es una ruta estratégica**. La Hidrovía comienza en puerto de Cáceres, en Amazonia, Mato Grosso, y llega a Palmira en Uruguay. Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge, Noble. Toda esta ruta que viene por el río Paraguay, que después confluye con el río Paraná hasta el Río de La Plata, es territorio argentino, jurisdicción nacional”.

“Lo que se plantea ahora, dejando de lado a la Administradora del Estado, es usar las dos terminales, el Canal Magdalena y el de Punta Indio, que desemboca en Montevideo. El punto es que las multinacionales van a tratar de llevar todo a Montevideo”.

El terreno de defensa de la soberanía no es el Congreso. Los sindicatos y las instituciones que denuncian esta nueva entregada deben declararse en estado de alerta, promover el debate y prepararse para la lucha. Todos los medios de comunicación, oficiales y opositores ocultan esta cuestión. **Sólo la clase obrera puede defender consecuentemente** el interés de la Nación oprimida, con sus propios métodos, exigiendo a la CGT y las CTAs que adopten medidas de acción directa, la huelga y la movilización para impedir que se consuma otra medida antinacional e imponer la estatización del comercio exterior. Así logrará arrastrar a otros sectores de las clases medias. No



Hidrovía Parana-Paraguay

desconocemos que la cúpula de la CGT es aliada y socia de esas multinacionales, pero le debe ser impuesto desde las bases esas medidas, como ya se le ha impuesto en los últimos años.

La pandemia desnudó las limitaciones del sistema de transporte público

Con el correr de los meses fueron cada vez más las ramas de la producción que retomaron el trabajo presencial. En el AMBA, al inicio de la cuarentena viajaba sólo el 15% de la cantidad de pasajeros habituales antes de la cuarentena. En septiembre, esta cantidad pasó al 30% y para diciembre la circulación en colectivos ya alcanzaba el 47% de la circulación previa a la pandemia. Ante el incremento en la cantidad de pasajeros, no hubo un incremento de unidades, sino que comenzaron a flexibilizarse las restricciones a la cantidad de pasajeros por colectivo. En los colectivos hoy son permitidas hasta 20 personas de pie, dejando la responsabilidad de control en el chofer.

La obligación a algunas empresas de garantizar a sus trabajadores transporte privado pocas veces se cumplió. Millones de trabajadores se vieron obligados a utilizar trenes y colectivos para ganarse el pan del día. Así, las largas filas y los amontonamientos arriba del transporte público volvieron a ser frecuentes, de la misma forma y, en algunos casos, incluso peor a como se veían antes de la pandemia.

En este contexto, debería haberse invertido lo antes posible en incrementar unidades, turnos y recorridos para que los trabajadores podamos viajar en condiciones adecuadas. Sin embargo, nada de esto sucedió. Los empresarios

del sector no han dado señales de estar dispuestos a adecuar el servicio a las exigencias de esta situación. Como contracara el gobierno siguió subsidiando millonariamente a los grandes grupos económicos que manejan el transporte. Solo para los colectivos de Buenos Aires el gobierno destina \$9.600 millones por mes en subsidios, que pasarán a ser \$11.000 millones. En promedio el gobierno destina \$513 mil por mes por colectivo. ¿A dónde va a parar toda esta gigantesca suma de dinero? ¿Cuánto es lo que realmente cuesta el funcionamiento de cada unidad?

El transporte es central para la vida del país, es esencial para que la producción pueda seguir andando y determinante en la vida de los oprimidos. La política del gobierno se restringe a dar subsidios al transporte y deja a su libre iniciativa la cantidad de unidades, la cantidad de recorridos, el mantenimiento de las unidades. Deja en manos de empresarios privados decisiones que afectan a la vida cotidiana de todos los trabajadores y son esenciales para garantizar el funcionamiento del aparato productivo. El transporte público tiene que ser planificado y estar en manos del Estado. Es en este sentido que marcamos la importancia de levantar la bandera de la Estatización del transporte público, sin indemnización, bajo control obrero colectivo.

Metalúrgicos: ¡Solo desde abajo podemos conseguir mejoras!

En 1975, cuando los metalúrgicos éramos considerados la aristocracia obrera, cuando marcábamos las negociaciones salariales para arriba, el valor hora de un oficial por convenio era el equivalente a dos kilos de cuadril. Hoy ese mismo oficial no llega a medio kilo de ese corte tan escaso en la mesa familiar en el país de las vacas.

¿Qué pasó desde entonces?

Pasó que desde aquella época para acá, dictadura y gobiernos de turno, han aplicado políticas de rebaja salarial constante y en dos grandes períodos, menemismo y macrismo, las clases empresarias han avanzado en el ataque y achique de nuestras condiciones de vida. Hoy, con el paraguas de la pandemia, esa clase parasitaria ha redoblado el ataque y profundizado el achique de nuestros sueldos. En menos de 50 años han pulverizado nuestra calidad de vida. Sueldos de hambre que obligan a jornadas agotadoras, ya sea con horas extras cuando las hay o con alguna changa fuera del laburo.

La categoría más baja de nuestro gremio, el ingresante, está en 32 mil pesos mensuales en mano. ¿Quién puede vivir con esto? Incluso la categoría más alta, oficial múltiple superior, no llega a los \$50.000 mensuales, apenas un alivio de un par de días. De este modo, todos somos pobres con sueldos miserables y doble explotación.

¿Y el sindicato?

Las direcciones sindicales han sido cómplices e indispensables para garantizar el robo salarial. En el tándem EMPRESARIOS-SINDICATO-GOBIERNO las direcciones traidoras fueron las que firman, pero además las que atan de pies y manos a los trabajadores, negándose a levantar un plan de lucha para pelear por salarios o dejan solos y aislados a los compañeros que pelean para enfrentar los ataques patronales, despidos, atrasos en los pagos,

persecuciones y un largo etcétera. Ellos son la garantía de la “paz social” frente a la carestía de vida. Dejaron pasar 9 meses de retroactivo salarial, entregando dinero que nos hace falta. Eso sí, de la tajada de obra social y el aporte sindical nunca se olvidaron.

¿Cómo cambiar las cosas?

Si algún compañero cree que el sindicato o las direcciones que hoy dirigen el gremio van a conseguir alguna recuperación salarial, está equivocado. Estas direcciones han demostrado durante años que trabajan para los empresarios y las políticas de ajuste de los gobiernos.

Ni una sola palabra frente a la escalada de precios, los despidos, las maniobras patronales, la precarización laboral, sobrecarga de tareas, rotación del personal para cubrir puestos, el aumento de la productividad que no es otra cosa que aumento de la explotación.

Tenemos que tomar en nuestras manos la tarea de organizar el reclamo de aumento de salarios. Organizarnos en cada fábrica, en cada taller para sumar voluntades y unirnos alrededor de un solo reclamo: SALARIOS IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR para que ningún metalúrgico gane menos de lo que se necesita para vivir dignamente. Empezar hablando entre nosotros, los compañeros de más confianza, juntarnos con los de otra fábrica que también ven como cae nuestra calidad de vida y quieren organizarse para buscar otro camino y no dejar en manos de nuestros verdugos la decisión de nuestros derechos. Empezar a perder el miedo y juntarnos para hacernos oír y pelear por lo nuestro, decidir entre todos, desde abajo como reclamar y pelear por salarios justos y enfrentar la precarización laboral que impulsan de facto. Ellos ganan millones con o sin pandemia. Ahora nos toca a nosotros.

Agrupación Emilio Tomásín

Enero 2021

Blackrock aumenta 17% sus activos en 2020

Termina el año con 8,676 billones de dólares en activos. Equivale multiplicar por dos la suma del PBI de todos los países de América Latina. En el último año, marcado por la crisis económica y sanitaria, este fondo de inversión sumó unos 1,200 billones de dólares.

BlackRock es uno de los grandes acreedores de la deuda Argentina e ingresó en la última re-estructuración de la deuda. Se encuentran entre los principales 20 fondos de inversión que concentran buena parte de la riqueza global (a través de las empresas y los bancos más importantes del mundo). De las 205 empresas más grandes del mundo,

BlackRock posee una participación significativa directa en casi un tercio de ellas e indirecta en el 45%.

Vemos así que mientras por un lado crecen la desocupación, el hambre y la miseria, por el otro una ínfima minoría sigue concentrando cada vez más las riquezas. En Argentina y todo el mundo, el principal bloqueo para desarrollar las fuerzas productivas es la propiedad concentrada y centralizada de los medios de producción en manos de un puñado de empresas cada vez más pequeño. Esta concentración del capital indica su madurez para su expropiación y conversión en propiedad colectiva.

Los Gobiernos tienen que garantizar las condiciones edilicias, de bioseguridad y salariales para las clases presenciales

Con una campaña mediática feroz tanto el Gobierno Nacional como los Provinciales impulsan la presencialidad en las Escuelas, poniendo el foco del problema en si los docentes vamos a empezar o no. El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, recorre las provincias para garantizar que el 3 de marzo comience el ciclo lectivo 2021 de manera presencial en todo el país a como dé lugar. El viernes 29 de enero fue el turno de Neuquén, donde además de reunirse con el Gobierno también lo hizo con la dirigencia de ATEN (TEP), que nada dijo de la responsabilidad que le cabe al Gobierno nacional, por el contrario manifestaron su respaldo al mismo.

Entendemos que se debe retomar la presencialidad, es irremplazable el aula como espacio en el cual se desarrolla el proceso de enseñanza y aprendizaje, de encuentro y trabajo colectivo para niños y jóvenes. No obstante, hay que dejar en claro que es absoluta responsabilidad del gobierno garantizarla. En sus discursos pretenden hacernos responsables a los docentes mientras que son ellos los que durante todo el año dejaron sin cubrir horas y cargos, que nada hicieron ante la falta de conectividad de un alto porcentaje de estudiantes y que dejaron librado a la buena voluntad y sostenimiento económico de los docentes la vinculación escolar.

Queremos retomar la presencialidad pero con condiciones edilicias, salariales y de bioseguridad. Sin aumen-

to del presupuesto educativo, el discurso del gobierno de “vuelta a las aulas”, es pura demagogia. A un mes del comienzo de clases, el gobierno no ha puesto un centavo en el mantenimiento, ni la concreción de las obras necesarias para que los edificios estén en condiciones de funcionamiento.

El protocolo que propone el gobierno no tiene como protagonistas a quienes ponemos el cuerpo en las aulas. Somos los trabajadores de la educación quienes debemos discutir cuáles son las condiciones materiales y pedagógicas para volver, no confiamos en quienes han demostrado que poco les importa nuestra salud, con hospitales que se caen a pedazos, sin insumos ni camas necesarias para atender las necesidades de la población. Es necesario también aumentar considerablemente el transporte público de forma de garantizar el traslado de docentes y estudiantes sin agravar aún más las condiciones en las que viajamos.

En una semana los docentes comenzaremos a presentarnos en las escuelas, llamamos a los compañeros a discutir las condiciones de trabajo y estudio, exigiendo a la conducción del sindicato la urgente convocatoria a asambleas. Los trabajadores de la educación junto a la comunidad educativa tenemos que organizarnos, formar comités en las escuelas que controlen y exijan el cumplimiento de los protocolos necesarios para la vuelta a la presencialidad.

Neuquén: con un bono no alcanza, necesitamos para vivir un salario que cubra la Canasta Familiar

Después de un año con una inflación que supero el 36% anual y sin ajuste salarial para los trabajadores estatales, en diciembre el Gobierno acordó con los sindicatos de Estatales un bono de \$ 15.000 por única vez, que se cobró en enero. Mientras que a los docentes nos impusieron un bono de \$20.000 en dos cuotas, a pagar en enero y febrero. Rechazamos esta propuesta no solo por ser una suma en negro, sino también que dejó a los jubilados exentos del cobro del mismo.

A días del comienzo del ciclo lectivo, el gobierno convocó a los sindicatos a mesas de negociación. En el caso de los estatales, la dirección de ATE aceptó un nuevo bono de \$15.000 a cobrar en febrero, en concepto del ítem ropa que les adeudaban del año pasado. La burocracia aceptó la propuesta sin chistar, dándole luz verde al gobierno para el comienzo de las clases. En el caso de ATEN la mesa está prevista para el 5 de febrero, los discursos del gobierno anticipan que allí no se discutirá la recomposición salarial que necesitamos los trabajadores de la educación.

Si Gutiérrez pudo imponer su política de congelamien-

to salarial durante el 2020, es porque la burocracia sindical, incluida la de ATEN, se lo garantizó llamando a no movilizar a las bases y desactivando cualquier intento de organización. Sólo las seccionales y minorías Multicolor convocamos y movilizamos sistemáticamente denunciando la situación de docentes y estudiantes. La dirección TEP-ATEN realiza acciones despegadas de las bases, sin asambleas, con el argumento de “cuidarnos”, pero también con la lógica de que la dirigencia negocia sola con el Gobierno, una práctica completamente ajena a ATEN.

Frente al retroceso salarial, urge la convocatoria a asambleas para discutir cómo le arrancamos al gobierno la recomposición salarial que necesitamos, que no es nada más ni nada menos que el equivalente a la canasta familiar.

La referencia para todos los trabajadores es el salario conquistado por Aceiteros con su enorme huelga: \$93.600 para la categoría más baja y sin antigüedad. Sabemos que el costo de vida es superior en la Patagonia, por lo cual una maestra que recién se inicia cobrando \$35.700 ni siquiera es un tercio de lo que necesitamos para vivir.

El trotskismo en Bolivia protagonizó la organización de la Asamblea Popular

Reproducimos a continuación un artículo publicado en el Boletín del CERCÍ a 5 años del fallecimiento de Guillermo Lora, a modo de presentación del documento “De la Asamblea Popular al golpe fascista”, publicado en 1972 y reeditado en nuestro volumen 2 de las Obras Escogidas de Guillermo Lora.

Solamente el POR reivindica las lecciones de la Asamblea Popular (AP) como bandera del movimiento revolucionario y como su obra. Inclusive las corrientes que participaron de ella reniegan de la experiencia, porque el programa de la AP rompió con sus salidas tradicionales de frentes populares, conciliación de clases y aventurismo guerrillero. En la base de la Asamblea Popular está el programa trotskista, la concepción de la revolución permanente y los métodos adoptados por los bolcheviques de táctica frentista, uso de la acción directa y defensa de la vía insurreccional.

En el seno de las masas se agitaban tendencias instintivas y subterráneas que el POR supo expresar, formando una unidad con la vanguardia de la clase obrera. La proclamación de la AP fue un gran acierto político del POR. Ante el instinto comunista de las masas y la necesidad de centralizar las fuerzas bajo la dirección proletaria, el POR pudo acelerar el nacimiento y desarrollo de la dualidad de poderes. El partido actuó sobre las manifestaciones espontáneas de las masas para elevarlas y hacerlas conscientes al entroncarse con el programa proletario.

Con el fin de la dictadura de Barrientos, que murió en un accidente en 1969, las organizaciones obreras y populares se reagrupan luego de un período de intensa persecución a los sindicatos y partidos, y masacres a los obreros. El POR era un partido minoritario, recién salía de la clandestinidad y se esforzaba por recomponer sus cuadros diezmados por la represión. El asesinato de los dirigentes proletarios César Lora, en 1965, y de Isaac Camacho, secuestrado y desaparecido en 1967, fueron dos grandes pérdidas para el partido y para el proletariado boliviano. A pesar de las dificultades el POR buscaba poner a la organización a la altura del programa del partido y poder, rápidamente, convertirse en la pieza clave del proceso político nacional.

En Abril de 1970 se realiza el XIV Congreso de la FSTMB (Federación Sindical de los Trabajadores Mineros Bolivianos). El documento orientador aprobado, presentado por los delegados poristas, proponía “la formación de un frente nacional de trabajadores, campesinos y fuerzas revolucionarias en torno de la COB, que oriente, promueva y conduzca el proceso de liberación del país”. El documento también caracterizaba la apertura democrática del General Ovando como limitada, exigía la nacionalización de los medios de producción y rechazaba la vía del co-gobierno, “que cerró el camino de la clase obrera a la conquista de todo el poder”.

Al mes siguiente se realizó el IV Congreso de la COB. El PCB presentó la defensa del apoyo crítico al gobierno, sin embargo prevaleció la tesis del POR de que se trataba de

unir a las fuerzas antiimperialistas para realizar las tareas democráticas y socialistas.

La tesis aprobada tenía como base el documento presentado por los trotskistas (POR), con enmiendas del PCB (Partido Comunista Boliviano) y fue considerada, posteriormente, la base para la Asamblea

Popular. Más que reivindicaciones económicas, presentaba un programa revolucionario para el país.

Las jornadas de 1970 llevaron al general Juan José Torres (del sector nacionalista-reformista del ejército) a la presidencia, en un contexto de golpes y contragolpes militares.

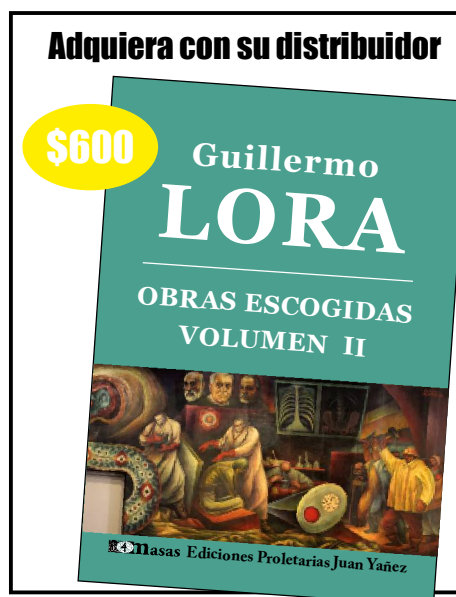
Simultáneamente la reunión ampliada de la COB instituyó su Comando Político del Pueblo (un bloque de partidos populares). Torres ofreció un co-gobierno. Dentro del Comando había partidos que querían aceptar, los mismos que querían adoptar el “apoyo crítico”.

Ante el apetito carrerista de los burócratas estalinistas y nacionalistas, Lora consiguió aprobar en el Comando que la COB aceptaría la mitad de los ministerios, pero con la condición de proporcionar los nombres de los dirigentes indicados por Asambleas, con mandato imperativo y revocable. Los ministros no podían ser del Comando.

Temiendo su desmoralización, Torres retrocedió. El 11 de Enero el Comando de la COB propone la creación de la AP como una tentativa consciente de impulsar la autoorganización y constitución de un poder obrero y popular a partir de las movilizaciones contrarias al golpe del sector más derechista del ejército, que casi derrumbó a Torres. La Asamblea, puesta en funcionamiento el 1° de Mayo de 1971 estaba compuesta de 60% de delegaciones obreras, una medida para garantizar la mayoría obrera, aunque no fuese la clase mayoritaria del país, y bloquear que la vía del pacto con el gobierno se impusiese.

El campesinado indígena, desde 1964, estaba sometido al pacto militar-campesino anticomunista. Durante la Asamblea comenzaba a deshacer esta alianza y algunos sectores del movimiento campesino pasaron a pedir su ingreso en la AP.

Los mandatos de los delegados en la AP eran revocables y subordinados a las bases, la mayoría de los delegados fue-



ron electos en Asambleas Generales. Había representación partidaria con dos delegados del MNR (después revocado), PRIN, PCB, PCB-ML, POR-Masas, PDCR y del Movimiento Revolucionario Espartaco (con 1 delegado). El ingreso de nuevos partidos debería ser aprobado por 2/3 de los delegados, y estas organizaciones deberían tener organización nacional e identificación con la línea política de la AP, definida a partir de la tesis política de la COB aprobada en Abril de 1970. La presencia de los partidos se medía mucho más por la influencia que tenían en el movimiento real, sea obrero, campesino o estudiantil. Es importante delimitar que a pesar de la hegemonía de las ideas poristas, el nacionalismo permanecía como importante influencia sobre la clase obrera. Tanto el nacionalismo como el estalinismo precisaban de radicalizarse y reproducir el programa trotskista para mantener el control de determinados sectores del movimiento de masas.

La disputa por la dirección de las masas convirtió a la Asamblea Popular en el terreno de profundos debates sobre los grandes problemas del país. Este aspecto fue criticado por las organizaciones militaristas y hasta por el mismo pablismo. De lo que se trataba era de arrancar a los oprimidos del control de las organizaciones extrañas al proletariado por medio de la presentación clara de nuestras formulaciones y reivindicaciones y la delimitación con otras tendencias. La lucha política y la polémica son necesarias en la lucha por derrotar las ideas de la clase dominante y enraizar el programa proletario en el seno de los explotados.

Así el POR se constituyó como dirección política de la Asamblea, lo que Lora iguala a la dirección política de la nación oprimida. Característica que se acentuaba con la definición de los rasgos soviéticos de la AP y la aproximación de la dictadura del proletariado.

La afirmación de la AP como organismo soviético, en la forma de frente único antiimperialista, contrapuesto al gobierno de Torres, es resultado de la influencia del POR que conectaba esta experiencia del movimiento obrero internacional, en particular la Comuna de París, de 1871 y los soviets de Rusia, de 1905 y 1917. En el documento *La asamblea y el poder ejecutivo*, del 26 de Abril de 1971, se lee: “Es decisión de la Asamblea Popular actuar como verdadero órgano de poder de las masas y del proletariado, o mejor, que deja de ser parlamento para convertirse en autoridad capaz de resolver los problemas y, al mismo tiempo, ejecutar sus decisiones a través de los métodos propios de la clase obrera”.

Su primera resolución alertaba sobre el peligro del golpe militar y la necesidad de una preparación del movimiento popular y sindical, proponía la huelga general y la violencia revolucionaria para enfrentar a los golpistas. Aprobó la bandera de control obrero mayoritario de la minería y de la Universidad única dirigida por el proletariado.

Enfrentando a un importante brazo del Estado burgués, la Justicia, se aprobó la constitución de Tribunales Populares.

Una comisión se hizo responsable de acelerar la investigación de los Crímenes Políticos (entre ellos el asesinato del dirigente minero porista Isaac Camacho). Se votó por la instauración de tribunales populares revolucionarios para responder a la inoperancia y complicidad de la justicia burguesa que “representa un mecanismo del sistema de dominación de la oligarquía”. “1º. Se crea el sistema de tribunales

populares revolucionarios con jurisdicción y competencia en los siguientes asuntos: a) delitos y daños económicos con el Estado, las universidades y bienes sindicales; b) entrega de riquezas naturales y avasallamiento de la soberanía nacional; c) masacre de trabajadores, representantes estudiantiles, populares, tortura y asesinato de trabajadores y dirigentes sindicales revolucionarios; d) delitos de funcionarios públicos en el montaje de procesos judiciales para despistar investigaciones; e) organización de complots contrarrevolucionarios en connivencia con el imperialismo, el gorilismo y la reacción”.

Las universidades que pasaron por la “Revolución Universitaria” en 1970 también estaban en el programa. La Asamblea deliberó por una Universidad única dirigida por el proletariado.

En el plano de la cultura hubo resoluciones en defensa del arte revolucionario, presente en los murales de Miguel Alandía.

En el seno del ejército, tropas y suboficiales lanzaron manifiestos denunciando la opresión y el despotismo de la cúpula militar. Esta fracción del ejército, autodenominada Vanguardia Militar del Pueblo, se estableció como simpatizante de la Asamblea Popular y de la lucha por el socialismo.

A pesar de que la resolución inicial de la AP alertaba sobre la inminencia del golpe, no fue posible derrotarlo. La preparación golpista se inició en Santa Cruz, con el apoyo de la dictadura brasilera, como parte del *Plan Cóndor*. Acabar con la AP estaba entre las prioridades norteamericanas, junto con la destrucción del gobierno de Salvador Allende en Chile y el de Juan Velasco en Perú. El día 19 de Agosto de 1971 80 mil personas respondieron al llamado del Comando Político en La Paz para resistir al golpe. Torres temía que las masas se armaran. Atacó a la Asamblea Popular acusándola de haber rechazado una alianza anteriormente y permitió que el alto comando militar conspirase sin obstáculos.

Después de que el pueblo exigiera por 12 horas que el gobierno entregase armas, el presidente entregó 400 viejos fusiles a los dirigentes de la COB. La resistencia al golpe estuvo en manos de las fuerzas sociales organizadas en torno a la Asamblea Popular, con participación decisiva de los militantes poristas. Fueron cinco días de combate. Sin división del ejército y sin acceso a las armas, la victoria militar de los explotados era prácticamente imposible, lo que llevó a un retroceso del movimiento (lo que evitó la destrucción física del proletariado), muchos de los militantes de izquierda lograron exiliarse. La dictadura de Banzer disolvió la AP y cerró las universidades. Así fue destruida la Asamblea Popular.

Los tres meses de duración de la AP marcaron el punto más alto de radicalización de las masas en que hubo posibilidades reales de la toma del poder por parte del proletariado boliviano. La presencia del partido marxista-leninista-trotskyista, con un programa probado en la lucha de clases fue decisiva y permanece como elemento fundamental para sostener la estrategia de la destrucción del capitalismo.

En la agitación cotidiana del POR se señala la necesidad de retomar el camino de la AP ante la impotencia del gobierno del MAS para solucionar los problemas de las nacionalidades indígenas, de los campesinos, obreros y demás oprimidos del país.

Artículos internacionales disponibles en la web www.por-cerci.org/cerci

- **Bolivia:** Las vacunas: ¿una solución estructural?
- **Bolivia:** Un gobierno incapaz para responder a los problemas del país y una dispersión en las acciones de las masas
- **Lenin:** 97 años del fallecimiento de Vladimir Ilyich Ulyanov
- **Ford:** Declaración del Partido Obrero Revolucionario – Brasil
- **Brasil:** Carta a los metalúrgicos de Ford, a la clase obrera y demás explotados
- **Brasil:** Nuevos episodios de la guerra de las vacunas

Estados Unidos: Biden asume la presidencia Las masas oprimidas deben organizarse para hacer frente al nuevo gobierno

El 20 de enero, Joe Biden asumió el cargo de presidente número 46 de los Estados Unidos. La ceremonia contó con público limitado, tanto por las restricciones sanitarias como por la militarización de la capital, Washington, donde se apostaron 25.000 hombres de la Guardia Nacional, para prevenir nuevos “actos de sedición”, como los ocurridos el 6 de enero.

En la posesión, se destacó la ruptura en la tradición de la transición del poder de un presidente a otro. Trump decidió no asistir a la ceremonia.

La puesta en escena de una “transición pacífica” no ha logrado ocultar las profundas divisiones que han marcado la política burguesa y las relaciones sociales en el país.

Primeros pasos

Biden firmó 15 «órdenes ejecutivas» (decretos), que simbólicamente marcan «una ruptura» con el legado de Trump. Aprobó el regreso de EE.UU. al Acuerdo Climático de París, reintegración a la Organización Mundial de la Salud (OMS); reducción de las “desigualdades raciales y civiles” en las instituciones y en las Fuerzas Armadas; un proyecto de “Ley de Ciudadanía”, para gestionar la frontera de manera “responsable”; regularización de 11 millones de inmigrantes ilegales; estructurando una campaña nacional para detener y frenar los daños del Covid-19 (que se cobró la vida de más de 400.000 personas), revocar la construcción del muro fronterizo en México, así como eliminar los impedimentos a la inmigración de países con mayorías musulmanas. Finalmente,

aprobó un ambicioso paquete de US \$ 1,9 mil millones para impulsar la economía y ayudar a las familias afectadas por la crisis económica y pandémica.

Herencia trumpista de última hora

El secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, se encargó de montar varias maniobras diplomáticas, días antes de su toma de posesión, que Trump transformó en decretos: la inclusión (una vez más) de Cuba en la lista de países «promotores del terrorismo», clasificando a los rebeldes hutties yemeníes como terroristas, revocando restricciones a los contactos comerciales y políticos entre Estados Unidos y Taiwán y, finalmente, denunciando a Irán como la «base de las operaciones de al-Qaeda» en el Medio Oriente.

Esta «herencia trumpista», aunque puede modificarse, no deja de señalar el camino, trazado desde la administración Bush, que Biden seguirá, en sus líneas generales intervencionistas. Eso corresponde a las necesidades de la ofensiva imperialista para controlar los mercados, los recursos y las regiones geográficas estratégicas, en las condiciones de descomposición del capitalismo, caída de la tasa promedio de las ganancias monopólicas y agravamiento de la guerra comercial.

Cambia la forma, la esencia permanece

Biden ha declarado en varias ocasiones que preservará la mayor parte de los intereses estadounidenses en la disputa comercial con China; así como el papel de liderazgo de Es-

tados Unidos en las decisiones internacionales. La retórica empleada en su discurso inaugural, que con la “fuerza del ejemplo” es que prevalecerá la hegemonía estadounidense en la resolución de los conflictos mundiales, pretende cubrir, con el velo del “multilateralismo”, la ofensiva monopolista norteamericana contra las masas y naciones oprimidas. Puede cambiar las formas, pero no el objetivo de proteger sus intereses mundiales.

Entre todos los precandidatos demócratas, el nuevo presidente es reconocido como el demócrata más cercano a la política nacional-chovinista de Trump. Se sabe que alentó la “revuelta” de la plaza Maidán, en Ucrania, que sirvió de detonante para el levantamiento e insurrección de los movimientos ultraderechistas y nacionalchovinistas ucranianos, que derrocaron al presidente Yanukovich (aliado de Rusia), con el objetivo de debilitar la influencia rusa, y dar paso a la penetración de monopolios en el país, rico en recursos naturales e industriales.

Como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, apoyó la invasión imperialista de Irak y Afganistán. Siendo senador opositor a Trump, apoyó el nombramiento unilateral de Guaidó como presidente de Venezuela. El cual sirvió de base para los intentos golpistas de derrocar al gobierno nacional-reformista de Venezuela.

Defensa de la gobernabilidad

Todo apunta a que Biden asume la presidencia, reuniendo el apoyo de las principales fracciones capitalistas y el alto mando de las Fuerzas Armadas. Tiene la estrecha ventaja de haber obtenido una mejor posición en el Senado y mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Según los analistas, el demócrata podrá aprovechar las esperanzas que suscitan los estratos más pobres y oprimidos, como los negros y los inmigrantes.

El “asalto” al Capitolio indicó que Biden enfrentará una oposición sistemática de la ultraderecha, generada dentro de la clase media. Al mismo tiempo, demarcó la necesidad política de acercarse a estos estratos y evitar el agravamiento de la división evidenciada en las polarizadas elecciones. En caso de que busque un camino intermedio, causará descontento entre las masas que lo apoyaron contra el socialchovinismo y el racismo de Trump.

El discurso en la asunción de «unir a la nación», sin importar si es «azul» (demócrata) o «rojo» (republicano), negro o blanco, muestra las bases de la política burguesa de manejar la democracia como instrumento de dominación de burguesía sobre las masas. Este es el significado objetivo de la retórica de que «la democracia ha prevalecido». Básicamente, existe la necesidad de preservar la centralización de las fuerzas económicas y políticas dominantes en torno a lo que es común en la burguesía imperialista: la defensa de la gobernabilidad y la capacidad imperialista de intervención mundial, como instrumento al servicio de los monopolios.

Estado policíaco

Las condiciones económicas, especialmente en las crisis, determinan en última instancia la política general y sus variantes particulares. Trump no pudo cumplir su programa para recuperar el poder mundial de la economía estadou-

nidense y potenciar las fuerzas productivas internas. Sus orientaciones llevaron a exponer la brutal opresión capitalista sobre las masas, resaltando la situación particular de los estratos negros e inmigrantes. Sobre esa base gobernará Biden. Y el factor decisivo es la lucha de clases. No hay forma de que el gobierno demócrata sofoque las tendencias chovinistas de grandes porciones de la clase media blanca, de la cual Trump reunió fuerzas y las alimentó. Lo más probable es que se fortalezca el estado policial y se acerque a las tendencias racistas.

Las Fuerzas Armadas advirtieron, en nota del Comando Conjunto, sobre el agravamiento de los disturbios sociales, y exigieron combatirlos con medidas represivas. Utilizaron el ejemplo de la invasión del Capitolio como indicador de las crecientes amenazas a la «democracia». Los militares apoyaron el contenido del nuevo proyecto de ley, que agrava las penas y fortalece la represión política, contra el «terrorismo interno» y los «actos de sedición»

La experiencia histórica enseña que, tomando como justificación la contención de la ultraderecha racista y xenófoba, el fortalecimiento del estado policial tiene como objetivo evitar que las masas explotadas se proyecten con sus métodos de acción directa, en respuesta a la crisis económica, desempleo y empobrecimiento.

Tareas de la vanguardia

Al inicio de su mandato, Biden contará a su favor con las ilusiones democráticas depositadas en sus promesas y con la crisis de dirección revolucionaria, que ha dificultado superar la desorganización de la clase obrera estadounidense, romper la política oportunista de la dirección política de los movimientos, y barrer el sindicalismo burocrático podrido.

Entretanto, la convulsiva marcha de la crisis del capitalismo y las contradicciones sociales han obligado a los explotados a luchar en defensa de sus intereses más básicos. Es muy posible que choquen, más temprano que tarde, con el gobierno, que en este momento aparece como un salvador de la democracia y la igualdad, y un promotor de la armonía mundial.

Las pautas para la reanudación del Acuerdo de París y la reanudación de la bandera de los derechos humanos, así como la reanimación de la Organización Mundial del Comercio, servirán para que Biden reoriente el intervencionismo estadounidense en el mundo. Es de esperar que la guerra comercial se agrave, y no al revés. China sigue siendo la potencia que debe ceder ante los monopolios y completar el desmantelamiento de su capitalismo de estado.

América Latina -dicen que no será una prioridad del nuevo gobierno- seguramente tendrá que soportar un peso importante de la desintegración del capitalismo mundial, como ya ocurría bajo la administración Trump. Bajo la máscara de la democracia se buscará reorganizar las fuerzas burguesas para continuar con las contrarreformas y eliminar los obstáculos nacionalistas, como los de Venezuela y Cuba. La lucha antiimperialista tendrá que ser encarnada por el proletariado, como parte de la defensa del empleo y del salario, y como expresión del programa de la revolución social.

(nota de MASSAS n°627 – POR Brasil)

Chile:

Sigue su marcha la maniobra constitucional electoral para dividir, confundir e ilusionar a las masas, para intentar sacarlas de su camino de rebelión

Las Asambleas Populares nacen como una necesidad en los oprimidos de elevar masivamente sus impostergables demandas, existiendo una **certera desconfianza en toda la institucionalidad especialmente la judicial, policíaca, parlamento y partidos políticos burgueses**, con gobiernos que a través de décadas han impuesto un régimen político a consciencia y voluntad, que atañe a todos los partidos políticos que han legitimado su accionar parlamentario y político en todos los ámbitos, regidos por la actual institucionalidad burguesa, administrada por una constitución diseñada y aprobada en una Dictadura Militar y desarrollada en la Dictadura de Gobiernos Civiles. Que les permite acceder y encabezar un gobierno conforme a condiciones parlamentarias amarradas y controladas por un Tribunal Constitucional al que ellos juran, postrándose al poder burgués establecido por el putrefacto régimen social capitalista.

Donde este gobierno ha enfrentado el levantamiento popular con una efectiva guerra discriminatoria, con elementos fuertemente armados contra los pobres, negros, Mapuche, minorías sexuales, y contra toda organización política y de masas que utilice el método natural de la acción y la democracia directa para elaborar sus planes de defensa contra la opresión que instituye la burguesía.

La trampa constituyente

Contra este tipo de organización la burguesía parlamentaria, los oportunistas: anarquistas, frenteamplistas, centristas seudotrozkistas, estalinistas contrarrevolucionarios, burócratas sindicales, gremiales, **han logrado que algunas de estas organizaciones y a otras con el engaño de las listas de “independientes”, ser utilizadas para llevarlas al campo del electoralismo**, que reafirma este putrefacto sistema capitalista, práctica burguesa seguida por los traidores de la clase que dicen representar, alejando a los explotados, oprimidos, humillados, de la ansiada libertad.

La burguesía emplea todas sus habilidades para sacar buenos dividendos, **auxiliada por sus fervientes colaboradores** que a través de un **acuerdo por la paz** firmado el 15 Nov-2019 y ratificado en Diciembre del mismo año por la ley 21200 que **produjo el fortalecimiento del gobierno contra todas las demandas que levantó la rebelión popular**, sellando el beneficio económico para la gran burguesía nacionaltransnacional. En lo político ceden en reformar y establecer una “nueva carta magna” que revalida lo esencial de la constitución del año 80, y con ello más represión, opresión y sojuzgamiento social.

No solo este acuerdo lo abarca todo, también utiliza a su favor, frente a la crisis estructural del capitalismo, la pandemia, narcotráfico, y todas las atrocidades producidas por el decadente capitalismo. (...)

La burocracia nacional de la FENATS, COMFUSAM, gremios parte de la CUT, dirigida por la stalinista Bárbara



Figueroa han abandonado a estos trabajadores, en cambio se han puesto al servicio de la trampa burguesa del “proceso constituyente” y desde el inicio de la pandemia **todo su esfuerzo y dedicación fue utilizado en la propaganda electoral del “Apruebo” implícito en la traición del plebiscito**, propaganda ligada a la felonía orientada y dirigida por todos los partidos burgueses desde la UDI al stalinista PCCH, CON LA FARSA DEL “RECHAZO” Y “APRUEBO”, que todos sabían que ambas opciones favorecerían a las políticas burguesas, las únicas personas, que aún quedan, son los ilusos que se dejaron seducir por la propaganda burguesa, que esta miserable reforma constitucional cambiaría sus vidas, en cambio hoy están saboreando el trago amargo de su derrota donde todo este fraude electoral está ratificando al gobierno y a todas las fuerzas conservadoras y reaccionarias del país. (...)

Nueva provocación contra el pueblo Mapuche

El gobierno utilizando a sus testaferros Ministro del Interior y Director General de Investigaciones PDI, para desvirtuar el clamor ciudadano, que son cada vez más los que repudian al gobierno y a todos los sectores políticos e instituciones burguesas -hábil en la utilización de la calumnia y propio de la burguesía- en contra del pueblo Mapuche catalogado históricamente de borracho, flojo, cuatrero, ladrón de madera etc.; ayer de terrorista, hoy de traficante de drogas y armas: con solo este argumento y **sin ninguna prueba se montó esta arremetida contra la comunidad de Temucucui** el mismo día que se condenaba al sargento que asesinó, a un hijo de esta tierra, el Weichafe Camilo Catrillanca. Con

un contingente policial compuesto por 850 hombres armados con armas letales, 80 de ellos que pertenecen al Equipo de Reacción Táctica, con alto entrenamiento policiaco-militar, portando armas de guerra tal como subametralladoras y transportados en vehículos blindados, contra un pueblo desarmado, en su gran mayoría niños, mujeres, ancianos, adultos en sus lugares de trabajo y a otros en la ciudad que esperaban el fallo judicial que condenaba al asesino del querido Camilo.

Acto terrorista que envuelve nuevamente al Estado de Chile, cometido por el gobierno de turno de Dictadura Civil de Sebastián Piñera, con la ley antiterrorista y delación compensada sancionada en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar y aplicada contra el pueblo Mapuche, por primera vez, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, contra este pueblo que lleva resistiendo a las fuerzas invasoras por más de 500 años, espíritu de lucha que no puede ser doblegado por la crueldad terrorífica impuesta por el Estado chileno con su política de dominación y explotación capitalista que mediante sus fuerzas represivas matan, torturan, mutilan, violan hacen desaparecer a los que se levantan legítimamente contra la opresión ejecutada por el brazo armado estatal burgués.

Ha sido práctica generalizada por todos los gobiernos burgueses, comenzando con invadir todo el territorio Mapuche, con un ejército regular, aplicó el genocidio y su negación cultural con el propósito de exterminar a esta nación y apoderarse de sus tierras ancestrales, una vez reducidos instala a suizos, alemanes, italianos incluso a nacionales con el fin de concluir esta indigna y cruel tarea.

A pesar de todo el padecimiento que le ha infringido el poder capitalista, **no le ha doblegado su espíritu de lucha por recuperar sus tierras, su autonomía y autodeterminación** sobre estas. El Estado capitalista, sus gobiernos y sus políticos, unos por acción, otros por omisión y muchos por ambigüedad han participado en contra de esta nación. Este montaje armado entre las altas autoridades de gobierno y policiales, demuestra decadencia, debilidad y abatimiento de una gobernanza que solo urde con torpeza acciones que le generan más odio y rechazo de las mayorías oprimidas.

El Lef Trawun convocado por la comunidad de

Temucucui, se refiere a una gran Asamblea de urgencia, donde se discute democráticamente los pasos a tomar por la Nación Clase Mapuche y extendida a todas las instituciones y organizaciones sociales chilenas, nos cabe destacar la presencia del dirigente estudiantil Víctor Chanfreau en representación de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES organización que se ha destacado en la revolución pingüina, en la rebelión popular comenzada el 18Oct2019, y en los cordones de asambleas populares, con una **clara definición en contra de la traición impuesta por la politiquería burguesa del acuerdo y la trampa del plebiscito y la farándula del proceso constituyente, que implica un rechazo y no votar a este engaño fraguado en el parlamento burgués.**

En un comunicado emitido, el 21/01/2021, desde Temucucui comunica el pueblo Mapuche y nacional que **formarán una policía Mapuche para defenderse de la chilena**, eso es un ejemplo de organización de la más amplia democracia

directa, que es crear un **comité de autodefensa armada** para defender a sus familias que solo desean trabajar la tierras, las que deben ser recuperadas en su totalidad, en manos de usurpadores y verdaderos ladrones y explotadores burgueses.

La respuesta de la clase obrera y los oprimidos

Las Asambleas Populares y los Cordones de éstas deben funcionar como organizaciones de lucha permanente en contra de los gobiernos dictatoriales y represivos, y **no permitamos que se utilicen como instrumentos de la politiquería electoral**, única forma de ganar a los ciudadanos es levantando las demandas de salud, educación, trabajo rechazando toda arbitrariedad que quiere imponer el gobierno amparado por todos los partidos burgueses enquistados en su parlamento que fabrica leyes que perjudican a las grandes mayorías y favorecen a una minoría explotadora, de esta manera debemos ir ganando la confianza mayoritaria de la nación que **debe enlazarse con la política revolucionaria de la clase obrera**, constituida en partido revolucionario vanguardia de la clase obrera y de los oprimidos por el decadente capitalismo, en enérgica y permanente lucha contra el capitalismo hasta derribarlo y sepultarlo para siempre y que toda esa riqueza material generada por el esfuerzo y trabajo de generaciones de miles de obreros, que han aportado su fuerza de trabajo, que este sistema social le permite que unas pocas familias acumulen y centralicen todo ese esfuerzo de historia de muerte y sangre derramada por la clase productora de mercancías y que esa acumulación, sea la que produce cesantía y hambre de las mayorías nacionales. Porque la avaricia y egoísmo de la clase dominante, no le encontramos el más mínimo gesto de generosidad y que se permita hacer justicia, por lo que todo esfuerzo en lograr justicia en tribunales nacionales o internacionales, en favor de chilenos o Mapuche serán infructuosos. Todo tipo de vejamen y arbitrariedad solo **será resuelto en la toma del poder por la clase obrera y oprimidos**, dirigidos por la vanguardia organizada en el Partido Obrero Revolucionario, formada por militantes profesionales proletarios, conscientes y educados en la disciplina del Socialismo Científico, que deben estructurarse en un **gobierno obrero-campesino** único capaz de conducir la revolución hasta concluir en la modernización industrial, de los países hoy aplastados por el capitalismo arcaico, el que debemos superar políticamente y el avance científico que entrega la modernidad, y con la tarea impostergable de la construcción del partido único de la revolución socialista mundial, basado en el internacionalismo proletario única forma de preservar la revolución mundial.

¡POR LA CONTRUCCION DEL PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO!

¡POR EL PARTIDO UNICO DE LA REVOLUCION SOCIALISTA MUNDIAL! ¡VIVA EL COMITÉ DE ENLACE DE LA RECONSTRUCCION DE LA CUARTA INTERNACIONAL!

¡EN DEFENSA DE LA REVOLUCION Y DICTADURA PROLETARIA! ¡VIVA EL

INTERNACIONALISMO PROLETARIO! ¡POR LA CONTRUCCION DEL PARTIDO OBRER REVOLUCIONARIO!

(Extractos de "Lucha Obrera" de Chile de Enero 2021)

Brasil: Rechazar el desvío del camino

Que las centrales, sindicatos y movimientos organicen la lucha por los empleos, salarios y salud pública. Que se posicionen por la estatización, sin indemnización, ocupación y control obrero de la FORD.

El cierre de Ford obligó a las direcciones sindicales a dejar de cruzarse los brazos. Los burócratas tuvieron que convocar asambleas cara a cara, organizar vigilias en las puertas de las fábricas, hacer protestas, llamar a parlamentarios y prometer unidad contra el desempleo.

Este hecho contundente siguió al cierre de una planta de Mercedes en el interior de São Paulo. Otros anuncios para el cierre de unidades fabriles, como 3M do Brasil y Yoki, encendieron más luces rojas. Estos casos son suficientes para verificar el proceso de desintegración económica que atraviesa Brasil. Pero la situación es mucho más grave. Los estudios indican que, desde 2015, se han cerrado 17 fábricas por día, totalizando 36.600. Solo en 2020, se extinguieron 5.500 plantas.

La crisis industrial aumenta el desempleo y potencia el subempleo. Refleja la regresión de la economía nacional, en un escenario mundial de destrucción masiva de las fuerzas productivas. Esto resulta en la mutilación de la fuerza laboral. Según cálculos del Dieese, solo la desactivación de Ford en Brasil resultará en más de 118.000 despidos, directos e indirectos. Así, crece el ejército de desocupados y subocupados, que, desde 2014, no ha dejado de crecer. Entre otras razones, la media de los ingresos de los trabajadores ha caído. Por eso avanzan la pobreza y la miseria de los explotados. Millones de jóvenes no ven la posibilidad de empleo. Son empujados al subempleo.

La desintegración del capitalismo ya no puede desarrollar las fuerzas productivas. La regresión industrial expresa la contradicción entre las fuerzas productivas avanzadas y las relaciones capitalistas de producción. A nivel mundial, hubo un exceso de capacidad productiva, sin un mercado correspondiente, que se estrecha cada vez más, debido a la explotación del trabajo, la creciente concentración de la riqueza y, por tanto, la regresión del desarrollo social. La crisis de la industria automotriz no es una excepción, aunque sea más destacada. En Brasil, la capacidad instalada es de 5 millones de unidades, hoy mueve solo la mitad de ese potencial. Resulta que los planes de desarrollo del pasado se topan con las leyes económicas del capitalismo. Gran parte de los recursos estatales se canalizaron hacia el sector automotriz, en la creencia de que, por esta vía, se aseguraría el desarrollo nacional y, con él, el desarrollo social.

Los avances en ciertos sectores monopolistas -el más expresivo fue el automotriz- incrementaron la concentración de la riqueza en un polo y la pobreza de las masas en otro. Provocaron grandes desequilibrios en el desarrollo general de las fuerzas productivas nacionales. Basta ver la composición histórica de la gigantesca deuda pública, para ver cómo los monopolios y el capital financiero saquearon los recursos y terminaron levantando poderosas barreras al desarrollo económico y social de Brasil. El cierre de Ford es un hito en la regresión de las fuerzas productivas nacionales y, en particular, de la industria automotriz.

Los dirigentes sindicales se vieron obligados a romper su larga cuarentena, para mostrar que hacían algo, ante el gran ataque de Ford a la clase obrera y a la economía brasileña. Empezaron, sin embargo, por trazar un camino que desvía la resistencia de los metalúrgicos y del proletariado en su conjunto. Condicionaron las asambleas a la espera de la apertura de negociaciones con la montadora. Presentaron como perspectiva la obtención de un acuerdo de indemnización. Montaron una vigilia en la puerta de la fábrica, en la que poco o nada pueden hacer. Y montaron una campaña publicitaria en torno a la desindustrialización, la necesidad de un plan de desarrollo nacional abstracto, la llamada de atención a las autoridades del gobierno y la crítica parlamentaria al gobierno de Bolsonaro. Estas respuestas derrotistas amortiguaron el impacto de la declaración de Ford sobre la decisión de irse de Brasil, independientemente del rastro de despidos.

El agravamiento de la pandemia, el cuadro de barbarie en la Amazonía y el inicio fraudulento de la vacunación cubrieron la débil resistencia de los metalúrgicos. Ahora el Frente Brasil Popular (PT) y el Frente Povo Sem Medo (PSOL) han salido de las catacumbas, para reabrir la temporada para el impeachment a Bolsonaro, comenzando con una caravana, bien al gusto de la pequeña burguesía.

El Partido Obrero Revolucionario llama a los trabajadores, la juventud oprimida y la vanguardia con conciencia de clase a rechazar esta desviación, montada por la burocracia sindical y las direcciones reformistas. La tarea del momento es organizar un movimiento nacional en torno a la estatización de Ford, sin indemnización, ocupación de fábricas y control obrero de la producción. Exigir la estatización al gobierno de Bolsonaro y a los gobernadores es la mejor manera de demostrar, por experiencia, que son, sobre todo, burgueses, independientemente de sus orientaciones políticas del momento. Es la mejor manera de mostrarle al proletariado y demás explotados que los gobiernos burgueses son servidores del imperialismo, las multinacionales y el capital financiero. La defensa de la ocupación fabril y el control obrero es el método de lucha que objetivamente coloca la situación y es la condición para unir a la clase obrera en defensa de la estatización de las fábricas cerradas, contra los despidos y por los empleos.

(Tomado de Massas n°627, Editorial, 24 de enero de 2021)



EM DEFESA DA REVOLUÇÃO E DIGNIDADE PROLETARIAS
ÓRGÃO BISEMANAL DO PARTIDO OBRERO REVOLUCIONÁRIO
MEMBRO DO COMITÊ DE ENLACE FIELA RECONSTRUÇÃO DA IV INTERNACIONAL
ANO 33 - Nº 627 - DE 24 DE JANEIRO A 7 DE FEVEREIRO DE 2021 - R\$ 4,00

**Organizar
a luta contra
o fechamento
da Ford!**

**OCUPAR AS FÁBRICAS E IMPOR O
CONTROLE OPERÁRIO DA PRODUÇÃO**

**Exigir do governo a estatização,
sem indenização!**

